

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO

CIRCUITO DE BOGOTA

SECCION SEGUNDA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil dieciocho (2018)

EJECUTIVO No. 2018-00140

**GEORGINA MOJICA CACERES vs. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL - UGPP**

Ingresa al Despacho el proceso ejecutivo radicado por la señora GEORGINA MOJICA CACERES, en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, para continuar con el trámite procesal que corresponda.

I. OBJETO DE LA SOLICITUD:

Librar mandamiento de pago dentro del proceso de la referencia, teniendo como título ejecutivo para su cobro la sentencia proferida por este Despacho el Trece (13) de junio de Dos Mil Catorce (2014) fls. 10 al 28, sentencia confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia de fecha 27 de marzo de 2015 (fls. 30 al 38), dentro del expediente 2012-00231, donde se ordenó reliquidar la pensión de la parte actora.

La solicitud de mandamiento de pago contiene obligaciones de dar en los siguientes términos:

“1. Muy comedidamente, le solicito a su señoría, se sirva librar MANDAMIENTO DE PAGO a favor de mi representada y en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP, de acuerdo al fallo proferido por el JUZGADO

VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ el 13 de junio de 2014 confirmado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION "C" mediante fallo del 27 de marzo de 2015, dentro del proceso 11001333502120120023100, por las siguientes sumas de dinero:

- 1.1. Por la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS (\$3'583.168), por concepto de INTERESES CORRIENTES Y MORATORIOS DEL ARTÍCULO 192 y s.s. del C.P.A.C.A.*
- 2. Que en caso que la entidad demandada alegue pago en cualquiera de las modalidades, se tenga para todos los efectos legales en la forma establecida en el artículo 1653 del Código Civil.*
- 3. Condenar a pagar a la demandada las costas y agencias en derecho del presente proceso."*

Los anteriores valores, se sustentan en el hecho de que la entidad ejecutada – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP al momento de dar cumplimiento a la sentencia, no canceló en forma total la condena.

I. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

Conforme a los lineamientos del artículo 192 del CPACA obra dentro de las presentes actuaciones el proceso identificado con el número 2012-00231, en el cual actuó como demandante la señora GEORGINA MOJICA CACERES, con sentencia proferida por este Despacho el Trece (13) de junio de Dos Mil Catorce (2014) fls. 10 al 28, sentencia confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia de fecha 27 de marzo de 2015 (fls. 30 al 38), donde se ordenó reliquidar la pensión de la parte actora, decisión judicial que constituye título ejecutivo para su cobro judicial, de acuerdo a lo preceptuado en el numeral 6 artículo 104 del C.P.A.C.A., junto con la resolución No 014162 del 31 de marzo de 2016 (fls. 42 al 48), por medio de la cual se dio cumplimiento a la anterior sentencia, sin que en dicha resolución se haya efectuado el reconocimiento de intereses, junto con la liquidación de la condena que obra a folios 52 al 53 vto.

Luego las diferencias que alude el ejecutante, de las cuales se desprende la liquidación presentada, será motivo de verificación en el presente ejecutivo, por lo que el mandamiento de pago se dictará conforme a las condenas establecidas en las sentencias judiciales que abarca la obligación impuesta a la entidad.

Ahora bien como quiera que la parte ejecutante pretende el pago de intereses, debe proceder el Despacho a verificar si la solicitud de cumplimiento al fallo radicada por el actor el 16 de marzo de 2016 – radicado SOP201600006329 (fol. 42), cumple con los presupuestos contenidos en el artículo 192 del C.P.A.C.A., esto es, elevar solicitud de cumplimiento al fallo ante la entidad dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, so pena de cesar la causación de los intereses hasta que solicitud sea presentada en debida forma.

Se tiene probado dentro del plenario que las sentencias objeto de ejecución proferidas dentro del expediente 2012-00231, quedaron debidamente ejecutoriadas el 30 de abril de 2015 (fls. 38 Vto), por lo que el vencimiento del plazo contenido en el artículo 192 del C.P.A.C.A., (3 meses) se cumplió el 1 de agosto de 2015, sin que a dicha fecha se hubiese elevado por el accionante solicitud alguna, razón por la cual a partir del 2 de agosto de 2015, cesa el pago de intereses; no obstante lo anterior, se tiene demostrado que con fecha 16 de marzo de 2016 – radicado SOP201600006329 (fol. 42), la parte actora elevó solicitud de cumplimiento a fallo, con lo cual a partir de esta fecha se reanuda la generación de intereses hasta el pago efectivo de la condena, para este efecto valga realizar las siguientes precisiones:

(i). Del 1 de mayo de 2015 – día siguiente a la fecha de ejecutoria de las sentencias (fl. 38 Vto) al 1 de agosto de 2015 – fecha en la cual se cumplieron los tres meses sin que la parte actora presentara solicitud de cumplimiento del fallo, intereses al DTF.

(ii). Del 16 de marzo de 2016 – fecha en la que se presentó la solicitud de cumplimiento del fallo ante la entidad (fol. 42), hasta el 30 de junio de 2016 (pues quedó incluido en nómina el pago en julio de 2016 folios 9 y 52 al 53), a la tasa

del DTF.

Ahora bien, frente a la imputación de pagos a intereses moratorios, debe indicarse que no es procedente en el presente asunto dicha pretensión, pues el artículo 1653 del Código Civil que consagra la *"IMPUTACION DEL PAGO A INTERESES"*, es aplicable o ha de aplicarse, cuando se debe capital e intereses, lo cual no ocurre en este caso, pues el mismo versa únicamente sobre el no pago total de los intereses.

Anudado a lo anterior, y teniendo en cuenta que en el sublite se discuten únicamente los intereses ordenados en el inciso 4 del artículo 195 del C.P.A.C.A., norma que regula el pago de los intereses derivados del cumplimiento de una sentencia judicial ejecutoriada dictada contra una entidad pública, la misma tiene regulación especial que no contempla remisión alguna al Código Civil; por lo que no se librara mandamiento de pago, frente a la pretensión segunda.

Respecto a la condena en costas solicitada en el líbello de la demanda, el Despacho emitirá pronunciamiento en la etapa procesal correspondiente, conforme al artículo 440 del C.G.P.

Por lo expuesto, EL JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA – SECCIÓN SEGUNDA EN ORALIDAD.

RESUELVE:

PRIMERO. Librar mandamiento de pago en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP y a favor de la señora GEORGINA MOJICA CACERES, identificada con la C.C. 41.476.644 de Bogotá, para que dentro de los cinco días siguientes a este proveído cumpla la obligación impuesta dentro de la sentencia proferida por este Despacho el Trece (13) de junio de Dos Mil Catorce (2014) fls. 10 al 28, sentencia confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia de fecha 27 de marzo de 2015 (fls. 30 al 38), dentro del expediente 2012-00231, donde se ordenó a la entidad al pago de intereses conforme a lo

señalado en el artículo 192 y 195 del C.P.A.C.A., los que serán motivo de verificación en el proceso ejecutivo, por lo que el mandamiento se dicta conforme a la sentencia judicial que abarca la obligación impuesta a la entidad.

SEGUNDO: El mandamiento de pago se libra por los intereses causados entre: (i). el 1 de mayo de 2015 – día siguiente a la fecha de ejecutoria de las sentencias (fl. 38 Vto) al 1 de agosto de 2015 – fecha en la cual se cumplieron los tres meses sin que la parte actora presentara solicitud de cumplimiento del fallo, intereses al DTF (ii). Entre el 16 de marzo de 2016 – fecha en la que se presentó la solicitud de cumplimiento del fallo ante la entidad (fol. 42), hasta el 30 de junio de 2016 (pues quedó incluido en nómina el pago en julio de 2016 folios 9 y 52 al 53), a la tasa del DTF y, no como lo especificó la parte actora en su escrito de demanda ejecutiva.

TERCERO.- NO LIBRAR mandamiento ejecutivo de pago por la pretensión segunda de la demanda, conforme a lo expuesto a lo largo de esta providencia.

CUARTO: Frente a la condena en costas el Despacho se pronunciara el Despacho emitirá pronunciamiento en la etapa procesal correspondiente, conforme al artículo 440 del C.G.P.

QUINTO: Para efectos de notificación del mandamiento ejecutivo de pago a las ejecutadas, el ejecutante deberá cancelar en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de este auto, la suma de cincuenta mil pesos (\$50.000.00) moneda legal, en la cuenta de ahorros N° **4-0070-0-27675-7** denominada Gastos del Proceso del Banco Agrario a nombre del Juzgado Veintiuno Administrativo.

SEXTO: Notificar este mandamiento ejecutivo a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, conforme a lo establecido en el artículo 291 del C.G.P, en concordancia con el artículo 199 del C.P.A.C.A.

SEPTIMO: Ordenar a la entidad demandada cumplir con la obligación dentro del término de cinco (5) días tal como lo dispone el Art. 431 del C.G.P.

OCTAVO: Notificar al señor Agente del Ministerio Público Delegado ante este Despacho judicial y al Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

NOVENO: Conceder a la parte ejecutada el término de 10 días contados a partir de la notificación para que conteste la demanda, proponga excepciones de mérito y solicite pruebas, conforme al artículo 442 del C.G.P.

DECIMO: Se reconoce y se tiene al Doctor JORGE IVAN GONZALEZ LIZARAZO, identificado con la C.C. 79.683.726 de Bogotá y T.P. 91.183 del C.S.J., como apoderado judicial de la parte actora, en los términos y para los efectos del memorial poder visible a folio 6 del expediente.

DECIMO PRIMERO: Por secretaria expídase primera copia que presta merito ejecutivo de la sentencia de primera instancia proferida por este Despacho y, agréguese a la presente actuación, previo requerimiento a la entidad ejecutada de dicha copia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA

JUEZ

catc

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
SECCION SEGUNDA

EL AUTO ANTERIOR SE NOTIFICA A LAS PARTES
EN ESTADO ELECTRONICO No. 18 A TRAVES DE LA PAGINA WEB
WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO, HOY 13 0 ABR 2018 DE DOS MIL
DIECIOCHO (2018), A LAS 8:00 A.M.


SECRETARIO

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTA
SECCION SEGUNDA**

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil dieciocho (2018).

2018-00140

CUADERNO DE MEDIDAS CAUTELARES

**GEORGINA MOJICA LIZARAZO vs. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL – UGPP**

Ingresa el presente proceso interpuesto por la señora GEORGINA MOJICA LIZARAZO, en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, con solicitud de medida cautelar presentada por el ejecutante,

I. LA MEDIDA CAUTELAR PRESENTADA.

Para garantizar el cumplimiento de la obligación impuesta en la sentencia proferida por este Despacho el 13 de junio de 2014 (fls. 10 al 28 del cuaderno principal), confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de marzo de 2015 (fls. 30 al 38 del cuaderno principal), dentro del proceso identificado con el número 2012-00231, el libelista solicita el Decreto de medidas cautelares contra LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, en los siguientes términos:

“1. El embargo y secuestro previos de la suma de dinero depositadas en las cuentas de ahorros y corrientes que la demandada tiene a su nombre en los bancos: BANCOLOMBIA S.A., DAVIVIENDA S.A., BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

COLOMBIA S.A., BBVA Y BANCO POPULAR y, los depósitos que se produzcan, hasta la suma estipulada en el artículo 599 del C.G.P.

Solicito señor juez, librar los oficios correspondientes para que las sumas retenidas sean puestas a disposición del juzgado, por intermedio del Banco Agrario – Sección de Depósitos Judiciales – dentro de los tres días, so pena de responder por los perjuicios que si (SIC) incumplimiento ocasione (art 1387 del C. de Co) del correspondiente pago y de incurrir en multa conforme a lo previsto en los numerales 4 y 10 del art. 593 del C.G.P.”

II. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

Respecto al tema traído a discusión, es preciso señalar que la ley 1437 de 2011, delimitó la oportunidad en el parágrafo 2 del artículo 195, para el embargo de los dineros de las entidades públicas, en los siguientes términos:

“El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento necesario con el fin de que se cumplan los términos para el pago efectivo a los beneficiarios. El incumplimiento a las disposiciones relacionadas con el reconocimiento de créditos judiciales reconocidos y con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos acarreará las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar. (...)”.

De la transcripción efectuada se obtiene que el ejecutante no quedó desamparado con la expedición de la ley 1437 de 2011, pues el espíritu de esta norma es el de implementar una cultura del sometimiento voluntario de las entidades a acatar los fallos condenatorios; obligaciones o acreencias, sin menester de acudir a la coacción de la jurisdicción.

En caso de no acatar la orden impartida dentro del término señalado, es decir, dentro del término de 10 meses a voces de la ley 1437 de 2011, el representante legal de la entidad deudora **deberá ser informado por el juez de conocimiento, de la falta de cumplimiento, lo que puede acarrearle las investigaciones no sólo de tipo penal, sino como lo precisa el parágrafo 1º del artículo 195 del CPACA, las de orden fiscal y disciplinario, con**

advertencia, que finalizado el pago de la deuda con los intereses que se hayan causado, podrá la entidad condenada a repetir contra el funcionario que incurrió en dicha mora.

Teniendo en cuenta que el pago de la condena debe ser efectuado dentro de los 18 o 10 meses según corresponda, los intereses que se causen por pago inoportuno viene a ser en detrimento de los recursos de esa administración, lo que eventualmente podría ser culpa del representante de tal entidad; de allí que luego del pago efectivo de la condena, podría dicha entidad – LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, iniciar el proceso repetitorio contra aquel desobligado.

Adicional a lo anterior el ejecutante en la petición de decreto de medidas cautelares, solicita el embargo de las cuentas que la entidad tiene en el banco BANCOLOMBIA S.A., DAVIVIENDA S.A., BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A., BBVA Y BANCO POPULAR y, los depósitos que se produzcan, sin embargo en dicha solicitud no se identifica el número de cuenta y el destino que tiene la entidad para cada una de ellas, presupuesto indispensable para el Decreto de la medida cautelar solicitada, pues para este Juzgador existe prohibición expresa en el C.P.A.C.A., del embargo de cierto tipo de cuentas, **so pena de falta disciplinaria**, como se observa al transcribir el párrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011:

“Parágrafo 2º. El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso sean inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Conforme a lo anterior, además de reseñar las entidades bancarias, se hace necesario para el Despacho verificar cuales recursos pueden ser objeto de la medida y cuales son inembargables, pues además del estatuto

administrativo, también el Código General del Proceso en su artículo 594, prevé los bienes que son inembargables:

ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

2. Los depósitos de ahorro constituidos en los establecimientos de crédito, en el monto señalado por la autoridad competente, salvo para el pago de créditos alimentarios.

3. Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje. Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los bienes destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se practicará como el de empresas industriales.

4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas.

5. Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado o deben anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas de ellas, mientras no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate de obligaciones en favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

6. Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes respectivas. La inembargabilidad no se extiende a los salarios y prestaciones legalmente enajenados.

7. Las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios.

8. Los uniformes y equipos de los militares.

9. Los terrenos o lugares utilizados como cementerios o enterramientos. 10. Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano.

11. El televisor, el radio, el computador personal o el equipo que haga sus veces, y los elementos indispensables para la comunicación personal, los utensilios de cocina, la

nevera y los demás muebles necesarios para la subsistencia del afectado y de su familia, o para el trabajo individual, salvo que se trate del cobro del crédito otorgado para la adquisición del respectivo bien. Se exceptúan los bienes suntuarios de alto valor.

12. El combustible y los artículos alimenticios para el sostenimiento de la persona contra quien se decretó el secuestro y de su familia durante un (1) mes, a criterio del juez.

13. Los derechos personalísimos e intransferibles.

14. Los derechos de uso y habitación.

15. Las mercancías incorporadas en un título-valor que las represente, a menos que la medida comprenda la aprehensión del título.

16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.

PARÁGRAFO. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar. En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene.

Significa lo anterior que, la solicitud de medida cautelar debe contener una relación precisa de las cuentas y su destinación y, no deben ser

presentadas de forma genérica como ocurre en el presente caso, porque se hace necesario verificar el Destino de cada cuenta o depósito, para así proceder a analizar si estas son o no inembargables, pues el decretar el embargo de cuentas, sin tener en cuenta su destinación, puede constituir falta disciplinaria; conforme a todo lo manifestado se negará la solicitud de medidas cautelares presentadas.

Por lo expuesto, EL JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA – SECCIÓN SEGUNDA EN ORALIDAD.

RESUELVE:

PRIMERO. NEGAR LAS MEDIDAS CAUTELARES, solicitadas por el apoderado judicial de la parte actora, conforme a lo manifestado a lo largo de esta providencia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

cutc

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
SECCION SEGUNDA

EL AUTO ANTERIOR .SE NOTIFICA A LAS PARTES
EN ESTADO ELECTRONICO No. 15, A TRAVES DE LA
PAGINA WEB WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO, HOY 13
DE 04 DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), A LAS
8:00 A.M.

13:00 ABR 2018



SECRETARIO